

Conferencias:

Las paradojas de la democracia en Brasil: “Violencia, crimen e impunidad” por parte de Alba Zaluar (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) y

Voz de René Millán (Director del Instituto de Investigaciones Sociales):

Tengo el placer de presentar a los ponentes del día de hoy. Voy a hacer una presentación realmente muy breve. El Doctor Hugo Cabieses es economista, consultor de Desarrollo Rural Andino, tiene en su haber un curriculum muy impresionante. Economista licenciado en la Universidad del Pacífico de Lima (1969-1972). Investigador visitante para el programa Estrategias de Industrialización en América Latina del Research Policy Institute (RPI) de la Universidad de Lund-Suecia (1977-1978). Les comento los últimos textos que ha escrito: *Desarrollo Alternativo y Desarrollo Rural: Debate sobre sus límites y posibilidades* (con Eduardo Musso, IICA-CreA, 1999); *Conceptos para un Desarrollo Alternativo Integral en Zonas Cocaleras del Perú: Actividades, Experiencias y Propuestas del Proyecto AIDIA* (con Eva Dietz y Jutta Krause, AIDIA-GTZ, mayo del 2000); *Plan Colombia: ¿seguridad nacional o amenaza regional?* (con otros autores; ALOP-CEPES; marzo del 2001). Éstos son sólo algunos de los textos de Hugo.

En cuanto a la Doctora Alba Zaluar, es doctora por parte de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es antropóloga y tiene un buen número de publicaciones en varias áreas: antropología urbana y violencia, antropología urbana y seguridad pública, antropología urbana y drogas, justicia ciudadana. Entre sus libros, tiene uno sobre drogas y ciudadanía, así como también, un buen número de artículos sobre el tema en revistas a nivel internacional.

Bienvenidos, es un honor tenerlos aquí.

Voz del Doctor Luis Astorga:

Una vez más, quiero agradecer su asistencia a esta serie de conferencias de la Cátedra UNESCO. Este mes, la Cátedra cumple un año de vida, gracias a ustedes, a este público que nos ha seguido desde noviembre del año pasado. Algunos de ustedes han venido prácticamente a todas las conferencias, otros no.

Hemos tenido el apoyo del Director del Instituto de Investigaciones Sociales René Millán, el apoyo de la Coordinación de Humanidades, el apoyo de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) que nos ayudo con el enlace con otras universidades. También el apoyo de tres personas que nos han ayudado en estos meses, especialmente a Laura Tort, a Mariana y a Cecilia. Muchísimas gracias a todos, que hacen posible que continúe la Cátedra con este tipo de eventos, para que ustedes tengan un conocimiento de viva voz con investigadores de distintas partes, en este caso del continente americano, con larga experiencia en la investigación sobre el tema del tráfico de drogas y otros ámbitos.

Un agradecimiento muy particular para Alba y Hugo por hacer este esfuerzo de venir de tan lejos, de que ustedes tengan la posibilidad no sólo de conocer lo que

pasa en Colombia. Hace poco tuvimos una conferencia con Paul Gotenberg relacionada con el Perú, acerca de la historia de la coca. En esta ocasión se tendrá una versión más actualizada y en el caso de Alba, Brasil, es uno de los países de los que se sabe menos, digamos, en comparación de lo que se sabe de Colombia, de Perú y Bolivia.

Alba es una de las estudiosas más reconocidas de Brasil, ella ha realizado trabajos muy interesantes en algunas favelas de Río.

Esperemos pues, que estas conferencias les dejen esas ganas de hacer investigación en este terreno. Han podido ver que la gente que se dedica a hacer estudios académicos sobre este tema, no les ha ocurrido absolutamente nada; no es un tema peligroso en sí mismo, todo depende desde que ángulo se investigue y con qué intenciones. Sin más, los dejo con nuestros conferencistas, le cedo la palabra a Alba Zaluar.

Voz de la Doctora Alba Zaluar:

Buenos días, les voy a presentar a ustedes lo que es un resumen de mi último libro. Habla de muchas cosas, hice un gran esfuerzo para escribir en español. Voy a hablar sobre tratar de comprender las dos paradojas: el proceso de democratización en Brasil, que empezó en 1984, se acompañó de un aumento extraordinario de la criminalidad. La otra paradoja es que lo anterior, sucedió en un país que se constituyó en la idea de cordialidad y de la negociación, aspectos que tuvieron siempre un papel muy importante en todos los asuntos internos y externos también. Lo anterior, nos hace entender muy bien el enigma, lo que pasa con otros países africanos, donde niños, mujeres y hasta nenes son asesinados. ¿Por qué en Brasil son los hombres jóvenes los que se matan entre sí, o son muertos por la policía?. En Brasil son 92% de los homicidios, en Río de Janeiro son 90%, en São Paulo 84% de los homicidios son cometidos contra hombres jóvenes. Otros tienen que huir por miedo a los policías.

Una Historia de la Violencia Social e Institucional

¿Por qué? Como todo país, Brasil tiene una larga historia de violencia social – institucional y privada— pero no de violencia política, como sucede en otros países latinoamericanos. Ésta es una de las razones principales por las que uno no puede explicar la actual ola de violencia como simplemente un efecto de las capas geológicas de la violencia convencional en Brasil –que, de hecho, ha disminuido después de la Segunda Guerra Mundial y ha aumentado asombrosamente a finales de los años 70, especialmente secuestros, asaltos y homicidios

En la región metropolitana de Río de Janeiro, la tasa de homicidios se triplicó durante los años 80, creciendo de 23 muertes por cada 100.000 habitantes en 1982 a 63.03 en 1990, un período en el cual la población de la ciudad se había estabilizado. Sin embargo, esto ocurrió principalmente en los municipios periféricos y pobres de la región metropolitana porque la investigación policial es particularmente difícil allí. Un detallado estudio de las averiguaciones policiales y casos judiciales durante 1991 en Río de Janeiro demostró que el 57 % de los homicidios ese año estuvieron relacionados al tráfico de drogas (Soares et al., 1996). Éste es apenas un indicio más que sugiere que el

crecimiento en la tasa de homicidios ha estado de alguna manera ligado al mayor ingreso de armas y de drogas en el país, puesto que ambos comenzaron al mismo tiempo.

Otro indicador de la correlación entre las luchas de pandillas y los asesinatos es la edad de las víctimas. Aunque los índices de muertes violentas han aumentado en todo el país, las víctimas más comunes no son niños sino varones adolescentes y jóvenes de las metrópolis y las regiones más ricas del país. Este rápido crecimiento de homicidios afectó particularmente a hombres jóvenes de entre 15 y 29 años en crímenes que ocurrían en lugares públicos entre gente que no eran íntimos, ni conocidos entre sí. Durante 1991, las estadísticas oficiales indicaron que 12.5 hombres habían muerto por cada mujer de entre 20 y 39 años en la región metropolitana de Río de Janeiro. La mayoría de los agentes de esta violencia eran varones jóvenes; también eran sus principales víctimas. Generalmente, la participación del violadores de menores en crímenes violentos es clara (Campos, 1988).

En 1980, según datos del Ministerio de Salud, 59/100.000 de los hombres de entre 15 y 19 años murieron por heridas de arma de fuego en el estado de Río de Janeiro; en 1990, 190/100.000 murieron de la misma manera; en 1995, 184. Las tasas para los hombres de entre 20 y 24 son: 111/ 100.000 en 1980; 260 en 1990; y 276 jóvenes en 1995. Durante este año, en la ciudad de Río de Janeiro, 6.399 personas fueron víctimas de muertes violentas de las cuales el 45% fueron homicidios. En la región metropolitana, se registraron 17.684 muertes por causas externas, de las cuales el 55% fueron homicidios. Como punto de comparación, las muertes por deficiencias alimenticias afectaron a 382 personas en el mismo año.

Éste es exactamente el mismo patrón hallado en conflictos por división y defensa de territorios y por pase de facturas de traficantes y ladrones, como el que se tuvo lugar durante la violenta competencia entre pandillas en los ghettos de Los Ángeles, Chicago y Nueva York que comenzó a principios del siglo XX. Pero la impunidad en Brasil ciertamente también es un factor para incrementar la tasa de mortalidad entre pequeños traficantes porque los homicidios rara vez se investigan y los crímenes relacionados con las drogas ilícitas se reprimen ferozmente en áreas pobres.

No obstante, en 2003, Río de Janeiro estaba lejos de ser la capital más violenta del país. Datos del Ministerio de Justicia / Secretaria Nacional de Seguridad Pública, muestran a esta ciudad en séptimo lugar respecto de los homicidios intencionales (41.1/100.000 habitantes), el cuarto lugar en robos, el decimoséptimo en violaciones, el octavo en robo seguido de muerte, el octavo en secuestros, el decimotercero en muertes por accidentes de tránsito. Vitoria es la primera en homicidios, Sao Paulo es la cuarta. Con respecto a los robos, Sao Paulo es la primera, la segunda en secuestros, la primera en robo de automotores y robos, la cuarta en el robo seguido de muerte, de la cual Porto Alegre es la primera. La comparación entre ciudades de más de 20.000 habitantes, demuestra que las diez más violentas se encuentran en el interior de los estados de Sao Paulo y Pernambuco, donde está el área más importante de producción de marihuana. Éstos exhibieron tasas de homicidio impresionantes: desde 149.4 por cada 100.000 habitantes en Diadema, São Paulo, a 86.4 en Serra Talhada, Pernambuco. (Sistema Único de Saúde/ Folha de São Paulo, 1999).

La visión de que en Río de Janeiro se encuentra el centro del crimen organizado es engañosa y parte de la feroz competencia parroquial que existe hoy en día en Brasil. Una de las rutas principales de cocaína dentro del país pasa por Rondônia, Mato Grosso, Paraná y São Paulo, estados en los cuales los índices de mortalidad violenta y la incidencia del virus VIH a través del uso intravenoso de drogas, alcanzaron los niveles más altos del país, duplicándose durante la década (Bastos, 1995). Los datos oficiales de las Secretarías de Justicia estatales, basados en reportes policiales, indican que, en la región metropolitana de São Paulo la proporción de homicidios intencionales creció enormemente durante los años ochenta. En 1981, la tasa de homicidios era de 21/100.000 habitantes (Caldeira, 1992), mientras que, entre 1990 y 1994, se estimó que era de 42.91/100.000 habitantes (*apud* Adorno *et al.*, 1995). De estas muertes, el 47.21 % involucraron principalmente a hombres jóvenes entre 15 y 24 años. A principios de los años 80, en la ciudad había aproximadamente 300 muertes por año debido a enfrentamientos con la policía militar. A fines de la década, había 585 muertes por año, y en 1991 hubo 1.140 muertes. Esas cifras no fueron incluidas en las tasas de homicidios. El número de muertes de policías también aumentó con los años. (Caldeira, 1992).

La arena política y la violencia privada

La violencia política –aunque en su conjunto no está ausente de la historia brasileña desde las épocas coloniales— no puede explicar por sí sola esta reciente ola de violencia interpersonal y privada. Tampoco lo explica el pasado reciente del régimen militar entre 1964 y 1984, cuando asumió formas de violencia colectiva, especialmente violencia institucional. A pesar de la oscilación entre la centralización y descentralización y varias interrupciones en el imperio de la ley; el poder parlamentario había sido institucionalizado en el Brasil desde el Imperio. Aunque existieron retrocesos, la tradición liberal parlamentaria brasileña, establecida con la fuerza que las oligarquías locales han tenido siempre en el país, se reveló a sí misma más fuerte de lo esperado, con ayuda de los partidarios del autoritarismo y del régimen militar. Pero esto sólo se extiende a los derechos políticos y al sistema electoral.

Las elecciones en el Brasil han sido sostenidas históricamente por arreglos de clientela y de múltiples mediadores: el principal patrón rural brasileño, llamado “Coronel” tenía que satisfacer a coroneles inferiores, a sus seguidores y a futuros electores así como al Gobierno Central. Los votantes eran entonces comprados con favores, pero también con verdaderos progresos locales así como la coacción sobre los votantes. Las oscilaciones entre el Gobierno Central y las élites del poder provincial u oligarquías hicieron que la negociación y manipulación fuesen más importantes que los conflictos abiertos y violentos. Consecuentemente, las elecciones en Brasil han sido menos violentas que en otros países latinoamericanos, aunque en algunos casos los resultados no fueron aceptados. Ello ocurrió en 1930 cuando Vargas ejecutó con éxito un *coup d'état* que no generó una guerra civil ya que se comprometió nueva y rápidamente con las oligarquías.

Entonces, se inició un régimen autoritario como ideología del Estado y no del mercado, lo cual no permitió asociaciones autónomas entre la gente. El Estado los organizó de una manera corporativa pero el modelo fascista no estaba asociado a una ideología de la supremacía de los blancos o la pureza de la raza. La legislación laboral reconoció a las organizaciones de trabajadores

ligadas orgánicamente al Estado y estableció salarios mínimos (Lamounier, 1977).

Con el deterioro del poder propio del coronel, prevalecieron los nuevos patrones de clientelismo, establecidos a través de los partidos políticos y los beneficios adquiridos a través del gobierno. Pero este sistema se tornó más inestable y menos legitimado para aquellos políticos que eran considerados falsos patrones y amigos (Zaluar, 1985). Se mantuvo como una manipulación autoritaria para ganar votos pero obstaculizó aún más el verdadero compromiso con las demandas de los votantes. Más bien, segmentó los intereses populares en demandas parroquiales y regionales.

Sin embargo, en el nivel social, un animado debate referente a las ideas acerca del “hombre cordial brasileño”¹ se ha ocupado de la importancia de la violencia en Brasil. No hay duda que el poder personal y la violencia privada eran privilegios de los propietarios de las plantaciones y de la hacienda. Los “coroneles” recibieron este rótulo porque tenían tropas de “jagunços” u hombres armados a su servicio dentro de sus propiedades. Eran comunes las reivindicaciones personales y matanzas. De hecho las luchas entre familias marcaron la historia de la violencia brasileña hasta el siglo XX, especialmente en el Noreste y en el Interior, las áreas más violentas del país por siglos. Los jueces tenían apenas alguna autonomía en estos lugares y las decisiones generalmente beneficiaban a los poderosos, cuyos crímenes permanecían sin castigo. Uno no puede sostener que las instituciones estaban por encima del poder privado, excepto en Río de Janeiro, la capital donde las cortes alcanzaron una cierta independencia. Por lo tanto, la impunidad tiene una larga historia en Brasil. Los policías eran entrenados para conformar y someterse a los propietarios poderosos, reprimiendo solamente a los pobres, a los negros y a los nativos.

Aunque es verdad que la esclavitud también ha conducido a siglos de profunda violencia interpersonal entre amos y esclavos, los explosivos episodios de odio racial, religioso y político fueron transitorios o localizados y nunca dividieron el país. Algunas rebeliones de esclavos acabaron en acuerdos en los cuales los africanos negociaron su derecho a un día semanal para descansar y realizar sus rituales religiosos con danzas y música acompañada por instrumentos de percusión. (Reis, 1986)

Por lo tanto, Brasil no tiene antecedentes de revoluciones gloriosas ni de guerras civiles entre partidos políticos y grupos étnicos y religiosos. En el siglo XVII, Brasil era un refugio para los judíos, tan importante como los Países Bajos (Mello e Souza, 1987). Sin embargo, también es un hecho de que la violencia tenía un real –aunque limitado– lugar en el imaginario colectivo de la sociedad brasileña, según lo sucedido en Portugal (Fatela, 1989) principalmente por la violencia privada y la desigualdad de trato en el sistema judicial.

Así, en Brasil nunca ha existido alguna cosa similar al fenómeno de “la violencia”, una guerra sin reglas como la que devastó a los partidos políticos y a la población civil colombiana durante los años 50. Ni ha habido guerrillas urbanas y rurales perdurables, ni paramilitares que dieron forma al peculiar patrón de violencia en Colombia. Contrariamente a lo que sucedió en otros

¹ Sergio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil.

países, el Congreso del Brasil no fue clausurado durante todo el período militar. El gobierno continuó utilizando la corrupción junto con el clientelismo como estrategias para controlar a los políticos que todavía tenían un cierto poder de decisión. Sin embargo, el mismo hecho de que la dictadura militar usase y abusase de la tortura, de las detenciones ilegales y de la censura facilitó el surgimiento del crimen organizado. Algunos de los oficiales que se habían adherido a esas prácticas ilegales se convirtieron en miembros de los grupos de exterminación y de extorsión o se vieron implicados con “*bicheiros*” (dueños de áreas de apuestas de animales) y los traficantes de droga (Gaspari, 2002). Finalmente, puesto que ha habido pocas o inexistentes reformas dentro del sistema judicial, y especialmente ningún cambio en las prácticas policiales respecto a los pobres, uno podría sostener que los efectos del régimen militar todavía están presentes en el funcionamiento de estas instituciones que no ejercen el respeto por los derechos civiles de los desamparados.

Paradoja brasileña: desarrollo económico, democracia y crimen violento

Durante los años 80, el país había recuperado progresivamente prácticas democráticas con elecciones y libertad de prensa. Esto siguió a un período de desarrollo económico a lo largo del régimen militar (1964-1984), donde la creciente renta nunca había sido distribuida. En vez de desarrollo económico, durante el proceso de democratización hubo crisis económicas, morales y políticas sostenidas por la rápida inflación. Brasil tiene una economía variada y moderna, pero sus instituciones políticas y jurídicas no se han desarrollado en consecuencia. El país no sólo mantuvo una de las peores distribuciones del ingreso en el mundo, sino que también había grandes desigualdades en términos del acceso a la justicia o a la justicia distributiva. Incluso después de la Constitución de 1988 que ha garantizado derechos civiles a los pobres, éstos continúan experimentando violaciones de sus derechos, aunque cada vez en menor medida.

Así, el núcleo duro de la discriminación en Brasil está en la esfera institucional, es decir, en las violaciones de los derechos de los pobres y negros asentadas en el funcionamiento del sistema judicial (Zaluar, 2001). Policías corruptos conforman lo que uno podría llamar “grupos de extorsión”, un nombre más apropiado que “grupos de exterminación” ya que los policías que matan a jóvenes traficantes lo hacen porque están exigiendo su parte del dinero proveniente del narcotráfico. No obstante, en realidad la mayoría de los jóvenes pobres son asesinados en luchas de pandillas. Ésta es una de las principales razones por las que uno no puede explicar la actual ola de la violencia como simplemente un efecto de la genealogía de la violencia en el país.

La inflación, que azotó al país hasta 1994, no es un fenómeno exclusivamente económico; también están involucrados factores psicológicos y morales. Por lo tanto ésta ha tenido efectos perversos sobre las actitudes y los valores de la población, especialmente entre la gente que percibía salarios y no obtuvo nada a partir de ella. La alta inflación erosiona la confianza mutua sin la cual, no hay relación social estable entre los agentes económicos. Además, la inflación era considerada como una forma de “robar” a los asalariados, y había desvalorizado la credibilidad gubernamental, fomentando crisis de gobierno en el país. Psicológicamente, había sido utilizada como una justificación por los crímenes contra la propiedad. Finalmente, la elevada inflación había facilitado el funcionamiento de circuitos del crimen organizado dentro del país en cuanto

a que había ayudado a crear los espejismos del “dinero fácil”. Aquellos que comenzaron a cometer delitos económicos cada vez más osados fueron ayudados por la creciente dificultad de llevar registros y control social sobre los presupuestos y las cuentas públicas. Por lo tanto, este entorno ha facilitado la corrupción y el lavado de dinero, actividades que son muy importantes para establecer vinculaciones criminales, pero que no han sido investigadas correctamente hasta ahora.

Incluso, cuando en 1994 la inflación fue controlada por el Plan Real, que estabilizó la nueva moneda en el país, ya existían las nuevas componendas financieras internacionales mágicas y volátiles, incluyendo los sistemas transnacionales de lavado de dinero para la corrupción gubernamental y el crimen organizado. Desde entonces, los crímenes financieros han recibido más atención y han sido arrestados algunos criminales ricos y de cuello blanco. Pero aún se sabe muy poco acerca de estos delitos y tampoco están controlados, incluyendo a aquellos relacionados con el tráfico a gran escala y sus instrumentos de lavado de dinero.

Es también un hecho que, para compensar las caídas en el salario provocadas por el desempleo, los bajos salarios, la inflación y las nuevas demandas de consumo, las familias pobres han colocado a sus niños y adolescentes en el mercado laboral para incrementar sus ingresos. Varios estudios señalan el crecimiento de esta categoría de trabajo y un índice de desempleo mayor entre los jóvenes. Sin embargo, la mayoría estos jóvenes y niños –muchos de los cuales trabajan informalmente en las calles– nunca se unen a grupos criminales, a pesar de su posición vulnerable. Solamente un número pequeño de ellos se involucra con las pandillas de traficantes o ladrones. Las necesidades básicas o el deseo de ayudar a sus familias no son suficientes razones para explicar porqué algunos se unen a estas pandillas y otros no lo hacen, aunque detrás de sus acciones y decisiones personales está la necesidad de ganar dinero. De hecho, pocas personas pobres optan por una carrera criminal.

La existencia de una nueva forma de mercado informal es otro elemento de la paradoja brasileña. Los mercados informales siempre han existido en Brasil y han sido una importante fuente de ingresos para aquellos con poca calificación laboral o poca educación escolar. Estos mercados informales han desarrollado redes personales y complicadas reglas para la ocupación de las principales calles en los centros urbanos. No obstante, en las últimas décadas, se les han unido los vendedores callejeros que ofrecen varios productos falsificados, algunos de los cuales fueron contrabandeados de otros países, y diversos tipos de mercaderías que han sido robadas de camiones, residencias y peatones. El comercio informal, que tradicionalmente ha sido una vía de escape al desempleo y una alternativa para el trabajo alternativo, consiguientemente se ha unido al crimen organizado. Esto es aún más evidente debido a sus conexiones con las tiendas que venden oro, los talleres mecánicos, partidas de autos chocados, vendedores de antigüedades, algunos de los cuales se han convertido en puntos de recolección de mercadería robada. Se ha descubierto recientemente que incluso algunas empresas legales de transporte de cargas son parte de la red del robo de automotores. Sin embargo, hasta ahora se han realizado escasas investigaciones sistemáticas acerca de estas redes, aunque a veces los policías reprimieron duramente la última línea: los vendedores callejeros.

Impunidad en el sistema judicial

Las raíces del crimen organizado en algunas instituciones son igualmente importantes para comprender el crecimiento de los delitos violentos en Brasil, alcanzados con estrategias de corrupción; funcionamiento desigual del sistema judicial debido a prácticas organizacionales creadas y mantenidas por aquellos que trabajan en él; el Código Penal obsoleto adoptado por los gobiernos republicanos. Todo ello, creó “islas de impunidad”, una expresión concebida por Dahrendorf (1987) para referirse a otros países.

De nuevo, las vinculaciones del poder político con las instituciones siguen siendo el quid de la cuestión. Aunque el Poder Judicial es hoy en día un poder independiente (demasiado independiente, se dice), el Ejecutivo designa a los miembros del sistema fiscal, aquellos quienes supervisarán y revisarán sus gastos. El Ejecutivo también designa los ministros de las Cortes de Primera Instancia así como también a los jefes de los departamentos de policía civiles y los comandantes de la policía militar. Ambos son fuentes de fácil corrupción ya que ni unos ni otros tienen la autonomía y voluntad necesarias para combatir eficazmente las violaciones de la ley. La reforma del Estado está avanzando lentamente.

Actualmente, Brasil es una democracia electoral. Pero las elecciones son muy costosas en Brasil y los candidatos reciben contribuciones, no siempre admitidas públicamente, de muchas fuentes, incluyendo aquellas provenientes de negocios ilegales. Se necesita imperiosamente más *accountability* o más transparencia para cambiar este panorama.

El funcionamiento —muy ineficaz e injusto— del sistema judicial en Brasil ha desempeñado un importante papel en la crisis de moralidad y el debilitamiento del *ethos* del trabajo, y permitió a los delincuentes a que se refugien en el país. Un increíblemente elevado porcentaje de homicidios no se investiga correctamente y sus autores nunca son identificados. Un estudio de la Justicia Penal en São Paulo (*apud* Adorno, 1990) ha encontrado mayores porcentajes de condenas entre aquellos acusados de robo, hurto y tráfico de drogas que entre aquellos acusados de homicidio y asalto. Otro estudio reveló que solamente el 1.38% de los homicidios cometidos contra niños y adolescentes hasta 17 años fueron investigados efectivamente, con las víctimas y los sospechosos identificados, y transformados en investigaciones policiales y casos judiciales que dieron lugar a sentencias (Mesquita, 1996). Otro estudio demostró que de 4,277 boletines policiales de homicidios apenas 4.6% tenían registrados los motivos y los autores. En Río de Janeiro, otro estudio demuestra que el 92% de los casos judiciales por homicidio fueron devueltos a la policía porque fueron mal investigados; es decir que solamente el 8% de los asesinatos registrados por policías bajo forma de una investigación fueron de hecho juzgados (Soares et al., 1996).

Tanto trabajadores como delincuentes tienen una visión moral del crimen que lo relaciona con un castigo necesario. Sin embargo, las dinámicas de las interacciones que describiré más adelante transforman esta visión en pos de una versión cínica, instrumental y manipuladora de la ley de parte de aquellos que han sido procesados. La suerte, la manipulación de actores judiciales y el debido proceso de la ley, las presiones ocasionales y sobornos antes, durante y después del proceso judicial, la rutinaria corrupción de policías, la intimidación de posibles testigos por el uso de armas, el terror ejercido sobre

vecinos, y un muy lucrativo negocio constituyen incentivos y justificaciones por los crímenes cometidos, incluso los más reprobados discursivamente como el homicidio doloso.

Como institución, la Policía tiene una imagen muy negativa. Cuando alguien la evalúa de manera positiva, generalmente se está refiriendo a una persona específica, tal como un policía que conocían o a un juez que tomó una decisión justa. Las cárceles y los distritos policiales son equiparados con las “escuelas de criminalidad”. El Sistema Judicial en su totalidad es percibido como “impulsado por el dinero”, como la mayoría de las organizaciones nacionales hoy en día. Los policías todavía tienen el poder de iniciar una investigación registrando un “auto da prisão em flagrante” (acta de delito flagrante) o cualquier otra prueba necesaria para un proceso judicial. A veces también mantienen la práctica secular, desvinculada de las normas institucionales existentes y de los derechos constitucionales de los ciudadanos brasileños, de torturar presos, principalmente gente pobre y de raza negra, para sacarles confesiones acerca de sus supuestos actos delictivos.

La impunidad es otro efecto de su frágil *ethos* profesional y precaria formación técnica como investigadores. Muchos delincuentes nunca son atrapados, lo cual es un estímulo para repetir actos delictivos, según ellos mismos sostienen. Y puesto que el dinero puede garantizar impunidad, tanto porque un policía no registrará el hecho y tampoco comenzará así una investigación, o porque los abogados bien pagados saben cómo evitar procesos judiciales o condenas una vez que éstas han sido dictadas, se hace aún más atractivo unirse a las pandillas del narcotráfico (Zaluar, 1998). Cuando son interrogados, los acusados pueden mentir porque no se encuentran bajo juramento de decir verdad. Sin embargo, los caprichos y deseos de los traficantes pueden ser decisivos para el resultado de la carrera de un joven (Zaluar, 1994; Lins, 1997).

Tráfico de drogas en el Brasil

El tráfico ilegal de drogas nunca había sido un problema social importante en el Brasil hasta fines de los años 70. Entonces, la cocaína comenzó a ser negociada a gran escala, siguiendo las nuevas rutas elegidas por los cárteles colombianos y la mafia italo-norteamericana. Por estas rutas los cargamentos de cocaína eran enviados a Europa y a los EE.UU. A lo largo de esta ruta, atravesando varios estados, pueblos y ciudades brasileñas, incluyendo Río de Janeiro y São Paulo, surgieron nuevos mercados de consumo para estas drogas. Desde principios de los años 80, hubo una clara estrategia de mercado orientada a cambiar los hábitos de los consumidores de droga en esas ciudades. Anteriormente, el mercado ilícito de drogas se refería casi exclusivamente a la marihuana, que era una droga clandestina y marginal y nunca tuvo gran importancia económica ni recibió una rígida política represiva. Así, la cocaína comenzó a ser ofrecida a un precio accesible para muchos.

El tráfico mismo cambió. Ya no es llevado a cabo en el ámbito familiar y por medio de relaciones cara a cara con el “hombre del camión” que trajo la marihuana de Pernambuco, el estado que lo produce. Una nueva organización compleja, diversificada y muy bien armada, en la cual cualquier conflicto comercial y personal es solucionado por medio de las armas, arribó con un culto viril por las armas y por violentas exhibiciones de poder. Esto creó las condiciones que tentaron a muchos jóvenes con bajos ingresos a involucrarse en una muy localizada, pero mortal guerra (Zaluar, 1994, 2002). Hoy, la

comercialización de drogas se convirtió en sinónimo de lucha de pandillas en la mayoría de los pequeños pueblos y grandes ciudades brasileñas.

Existen nuevas y diversas redes que conectan a los estados brasileños (São Paulo, Mato Grosso, Rondonia, Paraná, Minas Gerais, Espírito Santo, Río de Janeiro) y otras que conectan a Brasil con los países productores (Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia) a través de los cuales la cocaína y las armas alcanzan su destino dentro de los pueblos y las ciudades. En la dirección contraria, la mercadería robada –automóviles, camiones, joyas, electrodomésticos, cargamentos-, sustraídas de sus propietarios en autopistas, caminos, calles o residencias dentro de esos estados y utilizados en los intercambios no monetarios por drogas ilegales, alcanzan fácilmente su destino final. Este silencioso estilo de tráfico contrasta con aquel ruidoso y sangriento en los puntos de venta dentro de las *favelas* de Río de Janeiro, Recife, Vitoria, Belo Horizonte, Recife y São Paulo.

Aunque no es coordinado completamente como un esquema mafioso, el narcotráfico en Río tiene una eficiente estructura horizontal por el cual una villa pobre que se queda sin drogas o armamento inmediatamente los obtiene de villas aliadas: tanto en las redes del CV (Comando Rojo), o en la red del TC (Tercer Comando), las dos organizaciones más conocidas de narcotráfico y tráfico de armas. Estas redes o comandos conjugan las características de una red geográficamente definida, que incluye puntos centrales o de difusión, de los que se establecen otras articulaciones sobre la base de reciprocidad horizontal. Esto tiene aspectos positivos y negativos. Debido a tales intercambios, los adolescentes mueren no sólo en guerras por el control de puntos de comercialización, sino también por cualquier motivo que amenace el estatus u orgullo de los adolescentes que están tratando de afirmar su virilidad– el llamado “*Sujeito Homem*” (Alvito, 1996; Lins, 1997). Aunque el homicidio por motivos personales sea castigado severamente, los jefes y sus principales ayudantes, matan sus desafectos fácilmente.

Hay una división funcional entre las villas, algunas de ellas funcionan como centros de distribución para la venta al por menor, mientras que otras lo hacen como puntos de venta de pequeños traficantes. En las primeras, las pandillas excesivamente bien armadas dominan a la población local con reglas de seguridad extremadamente despiadadas. En las segundas, la situación de inseguridad varía, dependiendo también de la relación entre las pandillas del narcotráfico y los policías militares locales, o el barrio y la Policía. Debido a esto, la Federación del *Favelado* de la Asociación de Habitantes estima que alrededor de un 20% de los “*favelados*” han dejado sus respectivas villas.

El tráfico de drogas ha desarrollado divisiones entre villas tan cerradas entre sí que sus calles y construcciones internas se fusionan. Aunque los vecinos todavía reconocen las áreas por sus nombres originales, ahora son consideradas oficialmente como un complejo. En uno de estos complejos, o “*Alemão*”, después de la muerte del líder que unificó varias “*favelas*”, no solamente hubo allí un estado de guerra entre sus respectivas pandillas relacionadas con traficantes; los vecinos prohibieron el traspaso de las fronteras artificiales entre ellas. Muchos adolescentes han sido muertos porque pasaron de un área a otra, también debido a la existencia de las dos redes más grandes de este crimen-negocio.

De todas formas, algunos de los jóvenes, aquellos que se quedan en las calles de las *favelas* y los barrios pobres, valorizan a los traficantes y a sus

organizaciones. Sus símbolos –la marca TCK para el TC o Nike para el CV— son usados como maneras de identificarse entre sí. Los adolescentes dicen que pertenecen a uno de ellos como si fueran simpatizantes de un equipo de fútbol. También absorben el *ethos* guerrero con todas sus consecuencias diciendo que tienen enemigos por todas partes y necesitan armas. Finalmente, demuestran simultáneamente un profundo aborrecimiento hacia los policías y un temor a ser considerados delatores. Esta posibilidad representa un gran riesgo de ser asesinados y una enorme humillación por perder el respeto de sus compañeros. Al mismo tiempo hablan acerca del odio que tienen hacia los traficantes que han matado a amigos, parientes cercanos o vecinos inocentes. Algunos de los consumidores abusivos, que tienen vínculos con los distribuidores, también expresan el odio que sienten por la dependencia adquirida por aspirar cocaína, la droga pesada más comúnmente usada entre ellos. La actual resistencia hacia los traficantes puede explicarse debido a que recientemente ha habido un cambio en la jerarquía del CV: los líderes más viejos, generalmente en prisión, han sido desplazados por traficantes más jóvenes que eran más rebeldes y tenían menos vínculos con los habitantes locales. La mayoría de estos jóvenes delincuentes inspiraron solamente miedo o terror entre los vecinos.

La hiper masculinidad y la guerra

Hay un contexto de un *ethos* masculino guerrero engendrado en las pandillas del narcotráfico que ayuda a entender la apelación cada vez mayor a la violencia en tales lugares. Debido a que los jóvenes se han socializado en parte de esta manera (Elias y Dunning 1993: 10-11) compartiendo sus códigos con los cuales buscan respeto y consideración de los miembros de la pandilla. Muchos piensan que este contexto social es un componente natural y eterno de la interacción social ya que ellos tienen amigos o parientes que han sido parte de las redes de tráfico. Puesto que estos jóvenes intentan no violar sus reglas principales, se convierten en conformistas y pierden autonomía, y por lo tanto son denominados *teleguiados*.

Pero estos jóvenes pobres reciben, en sus respectivos barrios, los instrumentos del poder y placer de otros que vienen de otras partes. Esto es posible debido a funcionamientos institucionales convenientes y a la influencia de valores que los empujan a la búsqueda de sensaciones y dinero. Sin embargo, más allá de cualquier nexo de causalidad objetiva, aún aquellos que tienen lugar en el plano simbólico, algunos, pero no todos, se sometieron a las mismas condiciones, “delegar al mundo los poderes que los seducen a la criminalidad” (Katz, 1988). En este orden interno, actúan como autores de sus acciones.

Para los muchachos, la fuente principal de orgullo descansa en el hecho de que son parte de la pandilla, usan armas, se unen al robo y al saqueo, se hacen famosos por ello, y, si tienen la “predisposición” para matar u robar, pueden ascender algún día en la pirámide del crimen (Zaluar, 1994; Lins, 1997). Así, las estrategias de reclutamiento de jóvenes –calculadas de acuerdo a cuántos distribuidores permanentes (de 10 a 30) necesita el punto de comercialización—se basan tanto en la perspectiva de ganar “dinero fácil” como en la fascinación de los jóvenes por el poder y la fama.

De todas formas, la ambivalencia siempre se ha expresado en las palabras empleadas por ellos para denotar acciones criminales. “Vicio”, “retraso”,

“parada”, “condominio del diablo” expresan lo contrario del trabajo valorado moralmente (Zaluar, 1994). Los aplican para explicar porqué alguien está atrapado en un círculo de venganza, en matanzas así como en persecuciones policiales. “Revuelta” es el término positivo usado para denotar a los que no aceptarán sueldos bajos y trabajo duro, basado en la simple concepción de justicia social y orgullo masculino que desafía la explotación económica. Pero la injusticia puede también ser otro cruel delincuente o policías corruptos.

Sin embargo, la venta de drogas es citada generalmente por traficantes desilusionados como un lugar de desconfianza y animosidad, donde no hay respeto excepto por el arma de otro hombre. Es también un mundo sexualmente cargado, viril. Todos los hombres llevan armas; llevar un arma es “caminar acompañado” o “tener tu fierro en tu cinturón”. Mostrar el arma, o “sacar el palo”, es una característica común de esos delincuentes urbanos, una característica que puede resultar a menudo fatal. En vez del verbo “robar”, dicen “montarse” a sus víctimas, una expresión usada tanto para asaltar gente en la calle como para ingresar en casas. Matar a alguien es “acostarlos”. El público principal para tales exhibiciones es al parecer las mujeres a las que están intentando impresionar con su poder y dinero en sus bolsillos. Las mujeres confirman esta versión:

“...Entonces un individuo entra y pone un arma en su cinturón, piensa que es realmente muy bueno, se levanta un montón de mujeres, le hace un bebé a una de ellas, y muere de un día para el otro. A veces los tipos más viejos consiguen que las mujeres se metan en esto, que no tienen nada que ver con la escena, y piensan que todo va a estar bien, que todo va a ser como aquel tipo famoso con todo tipo de mujeres, con collares del oro, y van a tenerla fácil, van a un hotel agradable en un coche de lujo y todo eso...A la mayoría de las mujeres les gustan los delincuentes...debido a las armas, calculan que si alguien se mete con ellas, tendrán su merecido...”

Aquí puede estar el quid de la cuestión: un exacerbado orgullo masculino o hiper masculinidad y una sed de poder desenfrenado en un contexto histórico de crisis moral e institucional, con restricciones ineficientes hacia el altamente lucrativo mercado de las drogas ilícitas y en expansión. Internamente para la pandilla, hay una cruel estructura de poder. Para mantener controlada la salida de cocaína, un “puntero” o “jefe” debe estar constantemente alerta. Él debe cerciorarse de que sus competidores no estén sacando una tajada demasiado grande vendiendo más o mejores productos o adquiriendo más armas. Él tiene que negociar con sus proveedores nacionales e internacionales así como con los policías militares locales, que comúnmente reciben parte de las ganancias, de lo contrario es estafado, es reemplazado en su puesto por sus competidores tanto dentro y fuera de su pandilla, dentro y fuera de la cárcel (Coelho, 1989; Zaluar, 1988, 1994). Los demás, afuera el “gerente”, comúnmente apenas reciben “cargas” para vender, por las que son enteramente responsables. Pueden venderlas después de aumentar su peso con sustancias baratas para incrementar las ganancias; pueden consumir la mayor parte de las mismas, que los hace propensos a ser asesinados por el traficante. La pena de muerte es la sentencia para quienes repetidamente no pagan o para quienes “cortan” excesivamente la mercadería.

La posición política ocupada por los traficantes no está, pues, claramente definida. Pueden ser alabados por el respeto que tienen por sus vecinos o por las muchas actividades sociales que auspician dentro de las villas. En sentido opuesto, pueden ser odiados por la forma en que seducen u les ordenan a las chicas a tener relaciones sexuales con ellos, así como por la amenaza continua que sus armas representan para cualquier caso de conflicto o sospecha de traición que involucre a traficantes, habitantes desarmados y policías.

No obstante, los menores de edad mencionaron que las pandillas criminales otorgan más seguridad a sus miembros, puesto que aseguran asistencia jurídica que incrementa los chances de no ser condenados, cuanto más alto esté el menor en la estructura del crimen organizado. Puesto que el dinero puede comprar defensas, y las armas ofrecen la protección proveniente del miedo, ellos piensan que es conveniente cometer más delitos para tener dinero, armas y respeto interno así como siempre gozar de la protección de la pandilla. De hecho, su preferencia por el robo con armas se explica por el hecho de que pueden silenciar posibles testigos por temor, infligir temeroso respeto hacia los cómplices y ofrecer el arma como “convite” a los policías, maneras múltiples de escapar al arresto y dificultar la condena.

En la vida real este cálculo puede probarse inefectivo en cuanto a que no elimina completamente la probabilidad que un delincuente pobre o menos importante pueda atravesar la experiencia de ser molido a golpes, torturado o extorsionado por una suma de dinero que no puede proporcionar. O que pueda levantar sospechas tanto por parte del traficante como de los policías corruptos de que está ganando mucho dinero. La situación puede tornarse, como dicen, “siniestra”. Pueden ser asesinados por cualquiera de ellos. Pueden ser despojados de sus armas y mercaderías que acaban de robar y hasta pueden ser encarcelados si los policías prefieren demostrar que están trabajando o para incrementar sus apuestas en el juego de la corrupción. También pueden ser acusados de crímenes que no cometieron como una forma de demostrar el cumplimiento del deber en los distritos policiales. Además, la división del trabajo, generalmente muy explotadora, y las relaciones de poder también restringen las actividades criminales.

Las pandillas locales emprendieron violentas luchas por mujeres durante o después de los bailes organizados por los jóvenes durante los cuales escuchaban nuevos estilos musicales que recomendaban la confrontación violenta con el “sistema”. La historia de la guerra entre Zé Pequeno y Manoel Galinha es bien conocida. Manoel Galinha era un apuesto hombre de trabajo con una hermosa novia, que era deseada por Zé Pequeno, un líder de una pandilla que ampliaba su negocio de drogas a punta de pistola². Él lo “quería todo”, para asumir el control de todos los puntos de comercialización de droga en el barrio. Él también deseaba la mujer de Manoel. Manoel decidió organizar a su propia pandilla y vengarse. Comenzó una guerra que ha durado varios

² La primera pandilla que entró en guerra con Zé Pequeno, que conducía la pandilla más poderosa del barrio, era la llamada “caixa-baixa” (letras minúsculas), una pandilla de ladrones que le traían mercadería robada para vendérsela. Debido a las elevadas comisiones con que se quedaban, mataron a Zé Pequeno y asumieron el mando luego de una feroz lucha y fueron casi todos muertos en una lucha posterior con el Comando Rojo. Esta pandilla tenía una política de búsqueda de apoyo en la población local y por lo tanto combate a los ladrones locales que se meten con sus negocios. También sigue la estricta regla de la pena capital para los traidores o para los que maten por venganza personal. La muerte es el castigo para los hombres, mujeres, y “menores de edad” que matan por motivos personales, pero no para violadores.

años, involucrando a otras pandillas incluso después de que sus principales protagonistas fuesen muertos. Cientos de jóvenes murieron en el proceso porque la cadena de venganza personal es especialmente áspera entre pandillas de narcotraficantes (Zaluar, 1985 y 1994)³. Pero es más que probable que las frecuentes matanzas se deban al hecho de que las drogas y las armas ingresan fácilmente al país. Inclusive, no debe olvidarse que traficar en Río a veces es realmente complicado porque hay muchas pandillas e individuos que luchan por el poder y las posiciones dentro de la comercialización. Surge el mismo tipo de disputas por mujeres, por armas, por droga, y por bienes robados. Como dijo un joven y desilusionado “vapor”:

“Traficar droga es un negocio de venganza. Los traficantes tienen siempre un ojo puesto en los bienes de otros hombres, incluso en sus mujeres. Matarían sólo para conseguir la mujer de otro hombre.”

Así se llega a otro punto que puede explicar una de las paradojas. La destrucción de organizaciones vecinales y la pérdida de poder de sus líderes como los sacerdotes de las religiones afro-brasileñas y importantes músicos de las escuelas de *samba*, también una invención afro-brasileña. El enflaquecimiento de los lazos morales entre adultos y jóvenes, provocada por esto y por los cambios en la familia, aumentó la distancia entre ellos dificultando el control social que podría prevenir explosiones de violencia en los últimos. Los jóvenes se tornaron más vulnerables a las formaciones violentas de los grupos de pares cerrados.

Desde fines de los años 70 en adelante, la posesión de armas ha creado, para aquellos jóvenes involucrados en la guerra del narcotráfico, un poder militar que ha quebrantado las bases de autoridad. Tanto los maestros de escuela así como los líderes locales han visto disminuida su autoridad con relación a los jóvenes que tienen el poder del dinero y las armas (Guimarães, 1992; Zaluar, 1988, 1994). Hoy, a veces los niños no pueden ir a la escuela ni asistir a actividades en las que practican deportes, artes, y profesiones debido a las luchas entre las villas vecinas. Incluso aquellos adultos experimentados y políticamente involucrados que han trabajado en numerosas organizaciones barriales (Zaluar, 1985), han perdido poder y ahora están intentando recuperarlo con la ayuda del gobierno local.

Los traficantes también han tenido éxito penetrando varias organizaciones voluntarias y públicas, tales como los basureros comunales que trabajan para la compañía municipal de recolección de residuos –Comlurb– o los paramédicos de las ambulancias de los hospitales públicos. Incluso aquellos que no son parte de las pandillas son obligados a transportar drogas o armas dentro de los vehículos de un lugar de la ciudad a otro, sin levantar sospechas. Aquellos que no cumplen son asesinados. Además, los traficantes de la organización criminal que prevalece en São Paulo –*Primeiro Comando da Capital*– comenzó a traficar en *favelas* de Río de Janeiro como socios del CV. Al menos 70 hombres escaparon de la justicia mudándose a otro estado y uniéndose a traficantes predominantes en seis villas en Río para ejercer el negocio altamente lucrativo del narcotráfico. Trajeron las tácticas terroristas que comenzaron a ser utilizadas en enero de 2003. Duró solamente tres

³ Un total de 722 jóvenes fueron asesinados a lo largo de los 15 años de guerra en este barrio.

meses. Algunos líderes fueron atrapados y la orientación de la investigación se corrió finalmente hacia la esfera nacional e internacional.

También hubo la pérdida de privilegios dentro de la prisión, como teléfonos celulares, comida de restaurante, visitas diarias por varios abogados, enamoradas y parientes que entraban en las prisiones sin ser revistados. La revuelta de enero de 2002, cuando ómnibus fueron quemados y varios policiales muertos, duraron apenas dos meses. Misteriosamente como empezó, terminó. Los líderes principales están en penitenciarías de alta seguridad fuera de sus estados de origen. Otros líderes y negociantes ricos fueron identificados por la Policía Federal cuando el foco de la investigación finalmente fue para la esfera nacional e internacional. Desgraciadamente, en los estados el foco aun está puesto en los pequeños criminales y traficantes que nada dicen sobre sus conexiones para no terminaren muertos, lo que alimenta la dinámica perversa de la guerra de cuadrillas, la corrupción y la violencia policial.

Hay historias muy trágicas, muy tristes que hacen pensar ¿qué se puede hacer por los jóvenes en esta situación, en la que se están matando entre sí?
Muchas Gracias

Voz de Dr. Luis Astorga:

Al principio, por un olvido de mi parte, no di las gracias a la Facultad de Ciencias Políticas, evidentemente le agradecemos por este espacio. Vamos a hacer un receso de cinco minutos para invitarlos a disfrutar de los bocadillos, al regreso disfrutaremos de la conferencia de Hugo Cabieses y de la sesión de preguntas y respuestas.